

C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En esta causa RIT 117-2022 del Segundo Tribunal el Juicio Oral de Santiago, por sentencia de veintidós de agosto pasado, en lo que acá interesa, se condenó a Matías Ignacio Jorquera Céspedes, Brian Alexander Ojier Pérez, Johanny Yamilet Mina Angulo y Darcha Andrea Montecinos Pizarro, como autores del delito consumado de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inciso tercero del Código Penal, acaecido el día 01 de diciembre de 2020, en la comuna de Conchalí, Santiago; el primero a la pena 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de \$3.560.000.-(tres millones quinientos sesenta mil) pesos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 inciso final del Código Penal, más accesorias legales, sin costas, pena que cumplirá de manera efectiva, con los abonos que se indican.

Los condenados Ojier Pérez y Mina Angulo son condenados a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 1 UTM, accesorias legales, sin costas; se les sustituye la sanción por la de libertad vigilada intensiva por el mismo periodo.

Por su parte, Montecinos Pizarro, fue sancionada a la pena 5 años un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de \$3.560.000 (tres millones quinientos sesenta mil) pesos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 inciso final del Código Penal, más accesorias legales, sin costas, debiendo cumplir la pena de manera efectiva, considerando el abono reconocido en el fallo.

En contra de esta sentencia, la defensa penal pública de Jorquera Céspedes, Ojier Pérez y Mina Angulo, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal y también lo deducen –por el mismo motivo de nulidad- los defensores privados de Montecinos Pizarro.



Se procedió a la vista del recurso, fijándose esta audiencia para la lectura del fallo.

**Considerando:**

**I.- En cuanto al recurso de nulidad de la defensa penal pública:**

**Primero:** El recurrente esgrime la causal de nulidad de infracción de ley en relación con los artículos 1, 2 y 456 bis A, todos del Código Penal, por errónea aplicación del derecho que influyó en lo dispositivo del fallo, pues estima que los hechos asentados en el motivo Séptimo de la decisión recurrida no se subsumen en la norma citada, siendo equivocada su calificación jurídica.

Expone que en la narración de los hechos acreditados se indica que sus representados se movilizaban “*como pasajeros en el automóvil*” y “*en los asientos traseros del mismo*”, es decir ninguno de ellos conducía el vehículo receptado. Por ello, manifiesta que es imposible sostener que quien se desplaza en el asiento trasero de un vehículo de procedencia ilegítima lo tenga en su poder, pues carece de dominio sobre los actos que realice quien lo conduce.

Afirma que la receptación de vehículo implica para su configuración que el sujeto tenga en su poder, a cualquier título, las especies efecto de los delitos contra la propiedad que dicha norma contiene, bajo su posesión o al menos en simple tenencia, de modo de poder disponer de la misma. Sobre el punto expone que los sentenciadores hicieron extensivo lo indicado por el profesor Garrido Montt, sin embargo, él discrepa de dicha consideración, pues en el caso concreto a lo sumo hubo un “*uso*” del vehículo, mas no una tenencia o mera tenencia, como lo infieren los juzgadores.

Afirma que el sólo hecho de ir al interior del vehículo no transforma a sus ocupantes en detentadores, calidad que sólo tendrá el sujeto que tiene la facultad autónoma de decisión sobre el objeto, es decir el conductor.

Agrega que los recurrentes declararon en juicio como medio de defensa señalando que estaban en el automóvil por corto tiempo y que eran transportados por el imputado que conducía (quien no declaró en



juicio), hecho de la conducción que se determinó con la declaración de estos, con la prueba de cargo y con la testigo de la defensa. Sin embargo, los jueces descartan lo relatado por los acusados principalmente por estimarlo acomodaticio con la finalidad de no ser condenados; lo que no es correcto como consta en audios del juicio oral.

Dicho esto, sostiene que la calificación contenida en el considerando Octavo del fallo es errónea, ya que la presencia de los acusados al interior del móvil no los transforma en detentadores del auto, resultando claro que su rol en los hechos es absolutamente pasivo, más bien el de personas que están siendo “transportadas” y que finalmente no tiene poder de decisión en el dominio del hecho.

Finalmente pide se invalide la sentencia y dictando este tribunal sentencia de reemplazo absuelva a los recurrentes.

**Segundo:** Que el artículo 456 bis A del Código Penal, requiere la posesión de las especies, el transporte, comercialización, venta o transformaciones de las mismas y, el delito base para su procedencia ha de ser “*especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o apropiación indebida*”; por otra parte, la dimensión subjetiva del tipo penal contempla dos formas de concreción, cuáles son, que tenga conocimiento expreso del origen ilícito, o que el agente conozca o no pueda menos que conocerlo.

En el caso de la especie se estableció como hecho que los acusados “*mantuvieron en su poder y transitaron en el automóvil PPU CJHY-83, circulando desde las inmediaciones de la intersección de Av. Independencia con Av. Dorsal, Conchalí y hasta las inmediaciones de la intersección de Av. Independencia con Einstein, desempeñando **SAN JUAN YÁÑEZ** la conducción del vehículo sin sus placas patentes en su posición reglamentaria, encontrándose ambas al interior del vehículo. Por su parte, **DARCHA ANDREA MONTECINOS PIZARRO**, se transportó en el puesto de copiloto, mientras que **MATIAS IGNACIO JORQUERA CESPEDES, BRIAN ALEXANDER OJIER PEREZ y JOHANNY YAMILET MINA ANGULO**, lo hicieron en los asientos traseros. El automóvil PPU CJHY-83, inscrito a nombre de Héctor Yáñez*



*Maldonado, había sido sustraído por desconocidos el 30 de noviembre de 2020, mediante un delito de robo en bienes nacionales de uso público cometido en Los Araucanos a la altura del N°2651, Providencia, denunciándose tal hecho a las autoridades y encargándose el vehículo por tal motivo”.*

Los sentenciadores al hacerse cargo del elemento subjetivo del tipo razonan señalando que no existe justificación de la supuesta tenencia legítima alegada por la defensa del conductor del móvil, y que tienen además presente el “estado del móvil en que circulaban los acusados, sin patentes delantera y trasera, con un caimán inserto en la chapa de contacto, de gran tamaño, las patentes del vehículo en el habitáculo del móvil, en el sector de la palanca de cambios y la otra, detrás del asiento del copiloto, con numerosos trozos de vidrio, de la ventana trasera lado derecho rota. Hallándose en el asiento trasero detrás del copiloto, donde iba sentado Matías Jorquera Céspedes, una pistola a fogueo...”.

Los sentenciadores asentaron claramente que los acusados viajaban en calidad de pasajeros al interior del vehículo robado, y preciaron -conforme a la prueba producida en juicio- el estado y las condiciones materiales del vehículo al tiempo en que fue fiscalizado por Carabineros.

**Tercero:** Que quien esgrime este motivo de invalidación debe aceptar el “juicio de hecho” contenido en la sentencia cuestionada, razón por la cual únicamente corresponde revisar si los juzgadores erraron la calificación jurídica de los antecedentes fácticos, es decir si cabía aplicar en la especie el artículo 456 bis A inciso tercero del Código Penal.

**Cuarto:** Que el reproche central del recurrente radica en que sus representados no se encontraban en posesión de la especie –solo viajaban a bordo del vehículo robado como pasajeros- planteamiento que dice relación con el elemento objetivo del tipo, es decir, con la exigencia del legislador en los verbos rectores del ilícito, calificación jurídica que en concreto importa definir si los hechos asentados pueden



o no subsumirse en el tipo, lo que necesariamente lleva a determinar el sentido y alcance del artículo 456 bis A del Código Penal.

Sobre el particular es del caso señalar que la receptación es una figura específica, autónoma e independiente del delito base, y el artículo 456 bis A del Código Penal exige como elemento del tipo que el agente *“tenga en su poder”* a cualquier título, las especies hurtadas o robadas -vehículo en este caso- elemento objetivo que no solo se configura para estos fines en la persona del chofer del móvil desde que el precepto se refiere a un concepto más amplio vinculado con la posibilidad de disposición y de uso del bien hurtado o robado, lo cual en el caso de la especie se cumple plenamente, como exponen los juzgadores en el motivo Séptimo de la sentencia, al establecer que *“el porte y tenencia del automóvil objeto del delito descansa en la circunstancia de haber sido sorprendidos los acusados en él, ejercitando su uso y goce, independientemente de que unos y otros, lo conduzcan, o se dejen transportar en aquél, cuestión que gracias al testimonio de los Carabineros aprehensores sabemos con detalle”*.

**Quinto:** Que de lo antes señalado es posible entender que los acusados participaron de un dolo común en cuanto al origen irregular en la tenencia del mismo vehículo, sin que se encuentre acreditado en autos algún indicio o circunstancia que justifique o explique por qué se encontraban “momentáneamente” -como afirman al declarar en juicio- al interior del móvil sustraído ilegítimamente a su propietario, en compañía de otros sujetos, que fueron condenados como co-autores de receptación. Lo anterior demuestra que el elemento objetivo del tipo penal, se encuentra correctamente establecido y las normas denunciadas aplicadas en su real sentido y alcance.

## **II.- En cuanto al recurso de nulidad de la defensa penal privada:**

**Sexto:** Se recurre en representación de Darcha Andrea Montecinos Pizarro denunciando también la errónea interpretación del artículo 456 bis A del Código Penal, por considerar que el vehículo era conducido por el acusado San Juan y la recurrente subió al mismo cargada con cosas que había adquirido en la empresa Cannon, en la



que ella prestaba servicios junto a Mina. Se aduce que la acusada solicitó los servicios de éste y que los restantes ocupantes del móvil lo abordan con posterioridad, resultando imposible para ella dominar el hecho punible por una serie de razones que ni siquiera fueron consideradas en la sentencia, la que registra saltos lógicos no explicados por los juzgadores.

Indica que para la acusada era imposible tener siquiera la posibilidad de conocer el origen ilícito del vehículo y que el hecho de contratar un servicio de transporte de pasajeros no puede ser considerado acción que satisfaga el verbo rector de “tener” en su poder. Afirman que distinto es el caso de quien conduce o de quienes lo acompañan sin otro fin que obtener los réditos del negocio de transporte de pasajeros que viendo el vehículo con mayor tiempo, pudieron al menos representarse su origen ilícito.

Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis, insistiendo que tanto la jurisprudencia como la doctrina refieren que la expresión “*tenga en su poder a cualquier título ...*” importa que una o más personas mantienen una cosa en su poder cuando la detentan materialmente, elemento que se basta a sí mismo, por lo que malamente una persona que contrata un servicio de transporte, sea este formal o informal, se transforma en titular de un derecho respecto del vehículo que lo transporta.

Finalizan señalando que los sentenciadores aplicaron erróneamente el derecho al considerar que un pasajero que ha contratado un servicio de transporte, tiene bajo su poder el vehículo en cuestión, y también es un error estimar que el pasajero tanga ánimo de mantener bajo su poder el vehículo que lo transporta, inclusive si se tiene presente el estado material del móvil. Consecuente con lo anterior, pide se anule la sentencia atacada y dictando este tribunal sentencia de reemplazo absuelva de todo cargo a la acusada.

**Séptimo:** Que el recurso que se revisa no puede prosperar, pues el vicio que se alega se estructura a partir de un hecho que la sentencia no establece, cual es que la acusada abordó el vehículo como servicio de transporte, sin conocer el origen ilícito del mismo. Los sentenciadores



en el fundamento Séptimo de la decisión descartan expresamente la existencia de *“algún trato informal entre Héctor Ramiro Yañez Maldonado, dueño del vehículo, y Aníbal Gabriel San Juan Yañez, para su explotación informal de transporte de pasajeros, explicación que entregan el resto de los acusados para su exculpación...”*. Luego los juzgadores describen el estado material de vehículo -conforme a la prueba producida en juicio que describen y analizan- agregando a sus reflexiones *“¿qué vehículo bien habido, transita en tales condiciones? A juicio de estos magistrados, solo aquél que corresponde indudablemente a uno proveniente de un delito de robo como el denunciado por su propietario...”*. Agregando que las explicaciones dadas por los acusados como medio de defensa *“descansan en meras aseveraciones imposibles de constatar”* y que las acusadas Montecinos Pizarro y Mina Angulo no aportaron *“algún antecedente que diese cuenta de haber trabajado en el Oulet Cannon, o que hubiesen hecho compras allí, razón por la cual necesitaban ser transportadas por Aníbal o ‘Valentino’...”*. Es decir, no se encuentra acreditado el hecho esencial alegado por los recurrentes en la estructura del vicio denunciado.

**Octavo:** Que en cuanto al elemento objetivo del tipo de penal lo razonado en relación al primer recurso de nulidad, justifica también el rechazo de lo alegado en este arbitrio, por cuanto conforme a los antecedentes fácticos asentados por los sentenciadores la norma denunciada ha sido correctamente aplicada al decidir tener por configura el ilícito y la responsabilidad de la acusada.

**Noveno:** Que por todo lo antes razonado, fuerza es concluir que los recursos es estudio deben ser rechazados.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 297, 342, 372, 373, 374, 375, 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan los recursos de** nulidad interpuestos por las defensas de los condenados Matías Ignacio Jorquera Céspedes, Brian Alexander Ojier Pérez, Johanny Yamilet Mina Angulo y Darcha Andrea Montecinos Pizarro, en ccontra de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago el veintidós de



agosto de dos mil veintidós, en los autos RIT 117-2022, RUC 2001212015-0, la que en consecuencia, no es nula.

**Regístrese, comuníquese y otórguese copia a los comparecientes.**

Redactó la Ministra señora González Troncoso.

N°Penal-4038-2022.





Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Jaime Balmaceda E. y Abogada Integrante Gloria Alejandra Flores D. Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

